

# LA BENEMÉRITA

REVISTA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL

---

**Suplemento al núm. 37**

Enero de 1940

VOLUMEN 18.

---

## **DELITOS Y FALTAS Y MODO DE PERSEGUIRLOS**

---

Folleto I

---

Imp. y Enc. de la LIBRERÍA MODERNA. Santander

Ayuntamiento de Madrid

mem

Com  
este l  
as leg  
ta su  
píritu  
com  
verda  
su p  
anto a  
Perm  
ear a  
ma, qu  
conseg  
que pue  
modelo.

Parece  
il tan  
de delitos  
clases e in  
cio son lo  
beran po



## memoria de nuestro difunto director (q. e. p. d.)

Como quiera que hemos decidido no tocar nada de este libro, sino aquello que por razón de reformas legislativas haya sido variado, publicamos esta su prólogo íntegro porque él da a conocer el espíritu de aquel hombre que tanto se afanó porque sus compañeros de Cuerpo fueran en todo momentos verdaderos guardias civiles con conocimiento de su profesión y de sus deberes y derechos en tanto al cumplimiento del servicio.

Permítaseme dedicarle un sentido recuerdo y rogar a todos cuantos leyeren o estudiaren esta obra, que eleven una fervorosa oración al cielo para que siga el eterno descanso de su alma, que es lo que puede ambicionar un hijo digno de un padre modelo.

G. (HIJO).

## AL LECTOR

Parece natural, que teniendo el Instituto de la Guardia Civil tan frecuente y activa intervención en la persecución de delitos y delincuentes, infracciones e infractores, las clases e individuos del mismo, que por su especial servicio son los más directamente llamados a perseguirlos, debieran poseer de las leyes y reglamentos, por cuya obser-

vancia están obligados a velar, un conocimiento, sin perfecto, al menos lo más completo posible para el mejor éxito de su misión; pero en general no es así.

Muchos creen que para ser guardias civiles les es suficiente *cantar*, como papagayos, los artículos de la Cartilla y Reglamento; pergeñar, con fatigas, un parte; confeccionar, como Dios les dé a entender, un atestado. No estamos conformes con esta tan modesta opinión.

Nosotros, que durante muchos años hemos desempeñado esa augusta misión de guardias civiles, tenemos en ésta un concepto más elevado, más grande y creemos que los beneméritos deben poseer, sobre todo en los tiempos que corremos, conocimientos mayores que los que la Cartilla y Reglamento, en gran parte anticuados a pesar de haberse hecho en los últimos años nuevas ediciones, les suministran.

No basta, no, para ser un buen guardia civil, en sentido profesional hablando, acertar a hacer un parte e instruir un atestado, aunque éste, como el del cuento, surta siempre sus *efectos*; es preciso saber, como decía un ilustre e ilustradísima marquesa, refiriéndose a otros asuntos—el por qué, el cómo y cuándo y para llenar estos objetos; para que nuestros favorecedores—los que de ello tengan necesidad—no caminen a ciegas por el campo bastante intrincado y difícil de nuestra misión: para que todos, hasta los de inteligencia más humilde, sepan distinguir unos delitos de otros y éstos de las faltas y conocer su mayor o menor importancia; para evitar, en suma, que en ciertos centros y por determinados rutinarios amanuenses, se miren, no nuestra actuación, que por sí misma es estimada y tenida en el alto concepto que se merece, sino nuestros pobres *procedimientos*, como en algunos casos suelen mirarse; componemos esta obra, que creemos ha de ser bien acogida por el personal de tropa de la Guardia Civil y ha de servir, sobre todo al moderno



de lucecita que por el laberíntico camino de su misión le sigue.

Esta labor que comenzaremos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la cual hemos tomado cuanto con el servicio peculiar de la Guardia Civil tiene referencia, aclarándolo con notas y formularios, la continuamos, en igual forma por el Código Penal, cuyo conocimiento es indispensable a los beneméritos.

Estudiamos, además, transcribiéndolas, únicamente, en la parte que interesa al servicio, las leyes y reglamentos por los que la Guardia Civil tiene que velar, presentando los casos de su intervención y facilitando su tramitación con el correspondiente formulario práctico de atestado, denuncia y parte, a fin de que la obra sea útil, no sólo a los individuos, sino también a los comandantes de puesto, para los cuales publicaremos numerosísimos formularios de todos los órdenes, relativos a su actuación.

Definimos pues, en este libro, cada delito y cada falta, con la necesaria claridad práctica para que aun las inteligencias más pobres los puedan comprender y distinguir y citamos el artículo o artículos del Código, ley, reglamento u orden en que cada infracción está comprendida, aportando, en algunos casos, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia e intercalando, como ya dejamos dicho, cuantos atestados, denuncias, partes y formularios sean necesarios y en general cuanto pueda contribuir a facilitar a nuestros *civiles*, sobre todo a los modernos y a los estudiosos, el cumplimiento de su misión, que es algo más peliaguda que lo que generalmente nos creemos.

Nuestra satisfacción sería inmensa si estos buenos propósitos que nos animaron a escribir DELITOS Y FALTAS Y MODO DE PERSEGUIRLOS, los hubiésemos logrado.

JENARO G. GEJO (Un veterano).

# Delitos y faltas y modo de perseguirlos

## LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

### I

#### De la policía judicial

La «Policía judicial» tiene por objeto, y será obligación de todos que la componen, averiguar los *delitos públicos* que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes; recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima —*privados*— tendrán la misma obligación establecida en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto.

(Artículo 282 de la ley de Enjuiciamiento criminal)

Se llaman *delitos públicos* aquellos que tienen derecho a perseguirse sin previo requerimiento de la parte interesada o agraviada, o sea, al tener conocimiento de ellos. Estos delitos públicos son todos los comprendidos en el Código Penal, excepto los denominados *delitos privados*, que son los siguientes: adulterio, estupro, violación, rapto, abusos deshonestos, injuria, calumnia, amancebamiento, faltas de respeto de los hijos y tutores contra sus padres y tutores, y malos tratamientos entre marido y mujer.

Los delitos privados no pueden perseguirse sin que lo requiera la parte ofendida o su representante legal.

El adulterio sólo puede interesar su persecución



rido agraviado; el amancebamiento, la esposa; el estupro, la violación y el rapto con miras deshonestas, la incestuosa, sus padres, abuelos o tutores; la injuria y la calumnia, el ofendido y, por muerte de éste, sus herederos parientes, y las faltas de respeto de los hijos y pupilos, los padres y tutores, y los malos tratamientos entre marido y mujer, el cónyuge agraviado.

Los atestados que por los delitos privados se instruyan, deben encabezarse con la denuncia de la persona que sufre su persecución, comprobando, previamente, el derecho de ésta a denunciarlo. (Véase el formulario que en el lugar correspondiente publicamos al tratar de la denuncia y posteriormente de la persecución de los delitos privados).

Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares del Ministerio Fiscal de los jueces de instrucción y de los municipales en su caso:

1.º Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales.

2.º Los empleados subalternos de Policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.

3.º Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcalde de barrio.

4.º Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o cualquier fuerza destinada a la persecución de malhechores.

5.º Los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural.

6.º Los guardas particulares de montes, campos y sembrados, juzgados o confirmados por la administración.

7.º Los jefes de establecimientos penales, los alcaides de las cárceles y sus subalternos.

8.º Los alguaciles y dependientes de los tribunales y juzgados. (Art. 283 de la L. de E. C.)

Los guardas de consumos son funcionarios de la Policía judicial. (S. S. 8 abril 1905 y 20 febrero 1909).

Debe entenderse como autoridades administrativas los efectos del párrafo 1.º del anterior artículo, los gobernadores civiles de las provincias y los alcaldes, excepto los pedáneos o de barrio que sólo están considerados como agentes de autoridad; y los delegados de Hacienda en lo referente a contrabando y defraudación.

Inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de delito privado, lo participarán a la autoridad judicial, o al representante del ministerio fiscal, si pudiesen hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención.

En otro caso lo harán así que las hubieren terminado. (Art. 284 de la L. E. C.)

Ordena el anterior artículo que se dé conocimiento a la autoridad judicial de cualquier delito en el momento que se tenga conocimiento de él.

Aunque no siempre se efectúa así, sobre todo si el delito no es importante y no requiere la presencia judicial en el lugar de la ocurrencia; en casos graves, en los que el Juzgado tenga que personarse para proceder al levantamiento de algún cadáver, se le debe avisar, sin demora, sin perjuicio de que la pareja practique las diligencias pertinentes, que entregará al juez a su llegada.

Si en un punto de residencia del puesto o lugar del suceso, no reside el juez de instrucción, debe darse cuenta del hecho a esta autoridad, una vez entregadas las diligencias en el Juzgado municipal.

También debe requerirse el auxilio de un médico, ser posible el forense y si no el más inmediato, en los casos de delitos de sangre o accidentes que por su importancia lo requieran, para la asistencia facultativa de los heridos.



Si concurriese algún funcionario de policía judicial, de categoría superior a la del que estuviere actuando, deberá éste darle conocimiento de lo cuanto hubiese practicado, poniéndose, desde luego, a su disposición. (Art. 285 de la L. de E. C.)

¿Qué funcionario de policía judicial debe el guardia considerar como superiores a los efectos del artículo anterior?

El juez, el fiscal, el gobernador y el alcalde, en los asuntos relacionados con la competencia judicial y gubernativa; el delegado de Hacienda, los ingenieros jefes de Montes y Obras Públicas y demás funcionarios revestidos de autoridad, cuando se personasen a actuar sobre asuntos que competan en su jurisdicción; los superiores del Cuerpo y los de mayor graduación que los actuales, pertenecientes a los cuerpos de Seguridad y Carabineros, dando a los de este último Cuerpo la preferencia cuando intervengan en asuntos de contrabando y defraudación.

El personal del Cuerpo de Policía y Vigilancia, desde comisario a agente aspirante, se consideran como iguales a los guardias civiles. De concurrir a un mismo servicio, el personal de aquel Cuerpo y del Instituto, deben ponerse de acuerdo. La iniciativa corresponde al que primero haya intervenido, limitándose el otro Cuerpo a prestarle auxilio.

Los serenos, guardas jurados, guardias municipales y funcionarios parecidos, deben ser, en estos casos, auxiliares de la Guardia Civil.

Cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquiera autoridad o agente de policía, debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito, que se hubiesen recogido y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese. (Art. 286 de la L. de E. C.)

Las diligencias que la pareja practique —que el artículo anterior llama *diligencias de prevención*— deben cesar en cuanto se presente allí la autoridad judicial, entregándoselas bajo recibo, con los detenidos y efectos ocupados, y continuando las gestiones para la captura de los culpables y esclarecimiento del hecho, auxiliando también al Juzgado en los servicios que relacionados con el que se persigue, les encomiende, dándole cuenta, siempre por escrito, de lo que ocupen y averigüen para constancia en el sumario.

## II

### Auxilio a las autoridades judiciales

Los funcionarios que constituyen la policía judicial, practicando sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del ministerio fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encarguen los jueces de instrucción y municipales. (Art. 287 de la L. de E. C.)

El ministerio fiscal, los jueces de instrucción y los municipales, podrán entenderse directamente con los funcionarios de policía judicial cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título, pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. (Art. 288 de la L. de E. C.)

El funcionario de policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiesen recibido del ministerio fiscal, del juez de instrucción, del juez municipal o de la autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden, para que provea de otro modo a su ejecución. (Art. 289 de la L. de E. C.)



Si la causa no fuere legítima, el que hubiera dado la orden o hecho el requerimiento, lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico que se excuse, para que lo corrija disciplinariamente, a no ser que hubiese incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes.

El superior jerárquico comunicará a la autoridad o funcionario que hubiere dado la queja, la resolución que adopte respecto de su subordinado. (Art. 290 de la L. de E. C.)

El jefe de cualquiera fuerza pública que no pudiera prestar el auxilio que los jueces de instrucción o municipales o por un funcionario de la policía judicial le fuere pedido, se atenderá también a lo dispuesto en el artículo 289.

El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del jefe superior inmediato del que se excusare, en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior. (Art. 291 de la L. de E. C.)

Con las autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los jueces y Tribunales, se comunicarán éstos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa. (Art. 195 de la L. de E. C.)

Los individuos de la Guardia Civil, como auxiliares del Ministerio fiscal, y en virtud de lo dispuesto en el transcrito artículo 287, tienen el deber de practicar *572* dilación, las diligencias que directamente les encomienden las autoridades judiciales que en el mismo se expresan, relativas al descubrimiento de delitos y captura de delincuentes.

La R. O. de Gracia y Justicia de 22 de abril de 1889, recomienda a los jueces de instrucción y municipales y funcionarios del Ministerio fiscal, en consonancia con el artículo 288, que siempre que el servicio admita espera, soliciten la prestación del mismo de los superiores jerárquicos.

¿Qué dependencia tiene la Guardia Civil de las autoridades judiciales?

La de auxiliar de éstas únicamente, según circular del Cuerpo de 8 de marzo de 1873, la cual establece además, que al dirigirse los jueces a la Guardia Civil deben verificarlo por carta orden, sino por medio de *cio sin términos imperativos*.

La fuerza, por su parte, debe mantener siempre a dichas autoridades relaciones de buena armonía, no poniendo obstáculos a la buena marcha de la gestión de éstas, sino en el caso de solicitarse de ella servicios procedentes. Sólo en el de hallarse prestando un servicio determinado que no deba abandonarse o en el de falta de fuerza para llevarlo a cabo o el ser antirreglamentario que se pide, puede dejarse de prestar el que la autoridad judicial interese y, en este caso, debe dársele cuenta de las causas que impiden el prestarlo.

**1.—Comunicación dando cuenta a un juez de no poder prestar un servicio.**

En contestación a su respetable escrito de fecha de ayer, interesando se practique un registro en el domicilio del vecino del pueblo de Igollo, de la provincia de este puesto, Juan Gómez Roldán, que se sospecha tenga ocultos en el mismo varios de los efectos robados el día 16 del actual en el comercio de tejidos «El Barato» del vecino de esta capital, don Martín Pérez Pozohondo; tengo el honor de participar a V. S., que hallándose toda la fuerza de este puesto concentrada en el pueblo de..., por motivo de..., no le es posible por el momento, sin orden superior, distraer para este servicio parejamente para la prestación del que se sirve con el carne.



Dios guarde a V. S. muchos años.

Maliaño, 5 de enero de 1940.

El Comandante del puesto,  
*Pedro Parra Parrilla*

Jefe de instrucción del distrito del Este.—Santander.

*Si la causa de no poder prestar el servicio fuese por enfermedad y escasez de fuerza puede expresarse así...*, tengo el honor de participar a V. S., que estando parte de la fuerza de este puesto concentrada en la provincia de Oviedo y encontrándose enfermo y dado de baja para el servicio el único guardia que podría formar pareja con el que suscribe, no es posible prestar el servicio por V. S. encomendado. Dios, etc.

Sobre el servicio judicial tiene preferencia, en casos de probable alteración de orden público, el gubernativo, según R. D. de 6 de agosto de 1901. Por lo tanto, si se diese el caso, afortunadamente muy poco frecuente, que motivó esta disposición, u otro análogo, o sea: que un juez estuviese dando instrucciones a la Guardia Civil, para practicar un servicio relacionado con un delito o se presentase un alcalde reclamando el inmediato auxilio de la fuerza para el desempeño de otro relativo al orden público, debe atenderse preferentemente al alcalde, en este caso, por ser la primordial misión de la Guardia Civil la conservación del orden público.

En casos de esta naturaleza, y para ponerse a cubierto, debe darse cuenta de lo ocurrido al gobernador civil y a los jefes, inmediatamente que sea factible.

2.—*Dando cuenta de un incidente entre un juez y un alcalde por la preferencia de un servicio.*

A las nueve horas de hoy, y estando el juez municipal de esta localidad, don Ponciano Otero Cone-

jo, comunicando al que suscribe algunos datos sobre el probable paradero del vecino de Valnegro, Jaime Luz Sordo, autor del asesinato del de Rioblanco, Antonio Alga Verde, e interesándose la pronta captura del mismo, para evitar su fuga de estos contornos. Se presentó el señor alcalde de este Ayuntamiento don Pascasio Rojo Blanco, reclamando, por escrito, que personalmente me entregó, la presencia inmediata en el pueblo de Porqueros, de esta demarcación de ayuntamiento, por abrigar serios temores de que pudiera alterarse el orden, al practicarse algunos embargos que van a tener lugar en la tarde de hoy, por el agente ejecutivo de recaudaciones.

Como el señor juez municipal protestó de la intervención del señor alcalde y de nuestra preferencia por el servicio gubernativo, por entender que era más importante y urgente, en este caso, el judicial, que ya se hallaba él interesando cuando llegó el alcalde, y esto dió lugar a que entre ambas autoridades se suscitase un leve incidente verbal; tengo el honor de participarlo a V. S. para su superior conocimiento, a la vez que lo hago al señor gobernador civil de la provincia.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Cantaclaro, 21 de enero de 1940.

El Comandante del puesto,

*Astemio Astudillo Arnauero*

Señor primer jefe de la Comandancia.—Lugo.

Pudiera ocurrir—y no sería el primer caso—que algún juez de instrucción o municipal, exigiese, y aún más, se obstinase en exigir, de la fuerza, servicios improcedentes o antirreglamentarios y si así ocurriera, debe darse cuenta detallada al jefe de la línea, para que, comunican-



lo a la superioridad, se proceda a lo que haya lugar, sin perjuicio de hacerlo también, directamente, al señor Jefe de la comandancia en los casos urgentes.

3.— *Dando cuenta de servicios ordenados por el juez.*

El señor juez municipal de este término, don Leó-  
nides Leiro Linares, ha interesado repetidas veces del  
que suscribe, verbalmente, que una pareja de este  
puesto se persone todos los días que se celebren ju-  
icios de faltas, en el local del juzgado designado para  
este cometido, con el fin de evitar perturbaciones del  
orden.

De palabra, también, he pretendido hacerle ver a  
dicho señor juez, que tal medida es innecesaria y que  
la prestación de ese servicio, con carácter permanen-  
te, debe interesarla del excelentísimo señor goberna-  
dor civil de la provincia.

No conforme con esta opinión, en el día de hoy,  
he recibido de la expresada autoridad, el escrito que  
en copia número 1 se acompaña, permitiéndose or-  
denar que desde mañana, se persone una pareja, dia-  
riamente, en el juzgado, a las once horas, al objeto  
indicado y el que en copia número 2 es adjunto, *or-  
denando*, asimismo, se cite por la fuerza de este  
puesto a varios vecinos, por no poder hacerlo por sí  
el alguacil por hallarse enfermo, para que concurran  
a un juicio de faltas.

Como el que suscribe considera que no hay mo-  
tivo suficiente para dar, con carácter permanente, el  
primer servicio que interesa porque carece de atribu-  
ciones para efectuarlo así, mientras no lo sea orde-  
nado por sus jefes y que el segundo servicio es anti-  
reglamentario; tiene el honor de poner estos hechos

en su superior conocimiento, a los efectos que  
digne estimar oportunos.

Dios guarde a V. muchos años.

Jalavar, 21 de enero de 1940.

El Comandante del puesto,

*Juan José Sales Salido*

Señor jefe de la Línea.—Panizosa.

### III

## Denuncias de delitos

El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone al que presenciare la perpetración de cualquier delito público la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare.

Están exceptuados de la obligación de denunciar, cuando si quieren pueden también hacerlo, los *impúberos* o sea los varones menores de 14 años y las hembras menores de 12; el marido respecto de la mujer y ésta respecto del marido; los padres, abuelos, hijos, nietos, sobrinos y primos carnales y los padres, hijos y hermanos políticos, respecto a cualquiera de estos sus familiares.

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios—salvo los abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones y los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes en el de su ministerio—tuviesen noticias de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al Tribunal competente al juez de instrucción y en su defecto al municipal o funcionario de policía, sin que se entienda por esto obligación de probar los hechos denunciados, ni a formalizar querrelas.

El denunciador no contraerá en ningún caso otra re-



responsabilidad que la correspondiente a delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con su ocasión.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en multa de 5 a 50 pesetas.

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial. (Art. 265 de la Ley de E. C.)

La denuncia que se hiciere por escrito, deberá estar firmada por el denunciador y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona a su ruego. (Art. 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante, relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándolas ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará persona a su ruego. (Artículo 267 de L. de E. C.)

El juez, tribunal o autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita, harán constar por la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes la identidad de la persona del denunciador. — Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. (Art. 268 de la Ley de E. C.)

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o el funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiese carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieran si desestimasen aquélla indebidamente. (Art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Las denuncias que se hagan pueden ser por delito público o por delito privado que ya, anteriormente, hemos descrito, y presentarse verbalmente o por escrito.

De ser desconocido el denunciante, debe exigírsele antes de admitírsele la denuncia, que acredite suficientemente su personalidad por medio de personas conocidas de suficiente crédito; o por documentos personales que no dejen lugar a dudas.

Cumplido este requisito previo, si la denuncia es verbal, se procede a formalizarla por escrito como si fuera una declaración que prestase el denunciante.

Si éste no sabe firmar, debe buscarse una persona que lo haga a su ruego y mejor aún, dos, para que en todo caso quede a cubierto la fuerza del Cuerpo y no puedan desvirtuarse despues, con componendas y negativas las denuncias que ante ellas se hagan y las diligencias que sobre éstas se practiquen.

#### 4.—*Formulario de denuncia verbal por delito público.*

En Toralón, a los veintiún días del mes de enero de año mil novecientos cuarenta, el sargento Matías Moro Matienzo, comandante del puesto de la Guardia Civil de esta localidad, hace constar: Que a las once horas de este día, se personó en la Sala de Armas de este puesto, el que dice llamarse Juan Jura Jurado, vecino de Cantosduros, de cincuenta años de edad, de estado casado y de oficio labrador, provisto de cédula personal del corriente ejercicio, clase décimocuarta, número quinientos uno, que exhibe y recoge, manifestando: Que en las primeras horas de la mañana de hoy y al penetrar en la panera de su

(Continuará)



deli  
heme

gírsel  
cient  
ocida  
s qu

cia es  
fuera

a que  
todo  
medan  
s las  
s que

pú-

nero  
atias  
ordia  
once  
mas  
ura-  
de  
vis-  
lase  
e y  
de  
su

Suscribiéndose a la revista  
**LA BENEMÉRITA**

coleccionará una gran biblioteca profesional sumamente práctica

**LA BENEMÉRITA**

publica un número mensual de veinte páginas y un folleto de máxima utilidad para el servicio

Contribuya con su peseta mensual a esta gran obra profesional y propáguela entre los compañeros

\*\*\*\*\*

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: TRES PTAS. TRIMESTRAL

PAGO ADELANTADO POR GIRO POSTAL

Los gastos de giro a cargo del Suscriptor